



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-006-2021-00006-01 (O2-23-091)
Demandante: GILBERTO DE JESÚS GIL GARCÉS
Demandado: COLPENSIONES
Procedencia: JUZGADO SEXTO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No 148
Asunto: RETROACTIVO PENSIONAL E INTERESES MORATORIOS

En Medellín, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por **GILBERTO DE JESÚS GIL GARCÉS** en contra de **COLPENSIONES**, radicado bajo el n.º 05001-31-05-006-2021-00006-01 (O2-23-091).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

1.1 Demanda. Mediante poderhabiente judicial el señor GILBERTO DE JESÚS GIL GARCÉS persigue que se condene a COLPENSIONES al reconocimiento y pago del retroactivo pensional a partir del 08 de mayo de 2019 y hasta el 01 de junio de 2020, junto con las mesadas ordinarias y adicionales, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, la subsidio la indexación, y las costas del proceso.

Fundó sus pretensiones en que el 08 de agosto de 2019 fue calificado por parte de Colpensiones con una PCL del 55.30%, con fecha de estructuración del 08 de mayo de 2019; que el 15 de noviembre de 2019 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, confirmó en su integridad el dictamen de Colpensiones; que el 12 de mayo de 2020 solicitó

ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, misma que fue reconocida a través de Resolución SUB107817 del 15 de mayo de 2020 en cuantía inicial de \$877.803, incluyéndose en nómina de junio, y pagada en el mes de julio del año 2020; que está afiliado a la EPS SURA S.A. desde el 08 de febrero de 2006 y no cuenta con incapacidades, conforme certificación del 11 de marzo de 2020; que Colpensiones negó el retroactivo de la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración con fundamento en que el certificado de incapacidades de la EPS no trae la firma del funcionario competente para emitir dicha documentación; que el 17 de diciembre de 2020 realizó solicitud ante Colpensiones del retroactivo pensional, pero no fue respondida. (Fols. 1 a 6 archivo No 02).

1.2 Trámite de primera instancia y contestación de la demanda. La demanda fue admitida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 02 de agosto de 2021 (fl. 1 a 2 archivo No 05), ordenando su notificación y traslado a la accionada **COLPENSIONES**, quien contestó la demanda el 03 de septiembre de 2021 (Fols. 1 a 18 archivo No 08), oponiéndose a las pretensiones formuladas con fundamento en que el retroactivo solicitado fue reconocido a través de la Resolución SUB83722 del 5 de abril de 2021, en la que se ordenó el pago de \$10.558.432, con ingreso en nómina del mes de abril de 2021, por lo que, no existe ningún monto que se le adeude al demandante, siendo improcedente, a su respecto, también los intereses de mora. Como excepciones de mérito rotuló las de inexistencia de la obligación de reconocer retroactivo de la pensión de invalidez, improcedencia de la obligación de pagar intereses moratorios, prescripción, aplicación del principio de confianza legítima, imposibilidad de condena en costas, y la innominada o genérica.

1.3 Decisión de primer grado. El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 02 de marzo de 2023 (Fols. 1 a 4 archivo No 13 con audiencia virtual archivo No 12), con la que la cognoscente de instancia absolvió a Colpensiones de la pretensión de pago de los intereses moratorios pretendidos por Gilberto de Jesús Gil Garcés, gravándolo en costas.

Adujo que el problema jurídico consistía en establecer si la entidad de seguridad social incurrió en mora injustificada en el reconocimiento del retroactivo pensional que le fue otorgado al demandante a través de la Resolución SUB83722 del 05 de abril de 2021, para ello hizo alusión a los artículos 40 de la Ley 100 de 1993, 10 del Decreto 758 de 1990, y 3 del Decreto 917 de 1999, referidos a que, la pensión de invalidez se reconoce y paga desde la fecha de estructuración, salvo que con posterioridad a la misma se haya recibido el pago de incapacidades, evento en el cual, aduce, el disfrute opera desde la última incapacidad.

En el caso concreto, manifestó que inicialmente Colpensiones reconoció la pensión de invalidez desde el 01 de junio de 2020, y posteriormente, el demandante efectuó la solicitud

del retroactivo el 17 de diciembre de 2020, siendo negado el mismo el 11 de febrero de 2020; sin embargo, el 15 de mayo de 2021 mediante Resolución SUB83722 del 05 de abril de 2021, revocó la resolución denegatoria y concedió el retroactivo de las mesadas pensionales desde el 08 de mayo de 2019 hasta el 30 de mayo de 2020, siendo que la razón por la cual se negó inicialmente el retroactivo pensional se encuentra ajustado a derecho, ya que la certificación que aportó el demandante de la EPS SURA no daba certeza de la real procedencia del documento, pues el mismo no llevaba la firma de la persona responsable de tal certificación, además como se trata de una entidad privada, no hay lugar a la aplicación del Decreto 019 de 2012, en cuanto que le correspondía a Colpensiones hacer requerimiento a tal entidad para verificar el contenido de la certificación aportada por el demandante respecto de la EPS SURA.

Así las cosas, tras encontrar que la razón esgrimida por Colpensiones frente a la negativa inicial de reconocer el retroactivo pensional se encuentra justificada y ajustada a derecho, declaró la improcedencia de la pretensión relativa con los intereses de mora del artículo 141 de la ley 100 de 1993. Y en últimas, impuso costas procesales al demandante.

1.4 Apelación. La decisión adoptada fue apelada por la parte demandante, quien manifestó que debe tenerse en cuenta la reiterada jurisprudencia vertida en las providencias SL2609-2019 y SL14529-2014, respecto a que los intereses moratorios tienen naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, y en gracia de discusión, frente a la actuación surtida en la instancia administrativa por parte de Colpensiones, no está de acuerdo con que actuó conforme a derecho, ya que se debe tener en cuenta que desde el momento de la solicitud se aportó certificación idónea de que no le había sido generado o pagado incapacidades médicas que pudieran afectar el reconocimiento de la prestación; que desde marzo de 2020 empezó la pandemia, y por tanto, las certificaciones se estaban dando de forma virtual, y ante la solicitud realizada por el demandante a la EPS Sura, fue expedido en la papelería de la entidad, y si bien no tiene firma suscrita, si tiene la indicación de que la signataria es Yesenia Zapata del área de prestaciones económicas de la EPS SURA; que con la solicitud se resuelve el recurso y concede el retroactivo con la certificación del 13 de junio de 2020, lo cual tampoco cuenta con una firma manuscrita de ningún funcionario, ni siquiera se informa a la persona responsable, y se firma como EPS SURA prepagada; que la entidad impone requisitos no exigidos en la norma; que la entidad podía perfectamente verificar, y si bien esta es de carácter privado, Colpensiones está investida de todas las facultades para verificar la idoneidad del documento, sin que ello implique un retardo injustificado en el pago del retroactivo pensional; que se le impusieron cargas que no eran de su responsabilidad; que no actuó con razón atendible en el orden legal; que no se debe hacer la imposición de costas en caso de confirmarse la decisión, puesto que es desproporcionada.

1.5 Trámite de Segunda Instancia. El recurso de apelación fue admitido por ésta corporación el 24 de abril de 2023 (carp. 02, doc. 02), y mediante auto del 02 de mayo de 2023 (carp. 02, doc. 03), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso, siendo que oportunamente Colpensiones presentó alegaciones solicitando que se confirme la decisión absolutoria de primera instancia, dado que el actuar de la administradora de pensiones no fue caprichoso, sino apegado al ordenamiento jurídico.

2. ANALISIS DE LA SALA

2.1 Apelación sentencia, y principio de consonancia. Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.2 Problema Jurídico. El tema decidendi en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a dilucidar: ¿Si COLPENSIONES incurrió en mora al otorgar el retroactivo de la pensión de invalidez?, en caso positivo ¿si hay lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?

2.3 Tesis de la sala y solución a los problemas jurídicos planteados. El sentido del fallo de esta Corporación será **REVOCATORIO**, en razón a que COLPENSIONES no reconoció y pago la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración de la invalidez, contrariando lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, sin que se encuentre justificada la negativa al reconocimiento por el hecho de que se presentó el certificado de incapacidades sin firma del funcionario de la EPS SURA, lo que conlleva a la prosperidad por intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, junto con la indexación.

2.4 Causación y disfrute pensión de invalidez. No es objeto de controversia que el señor GILBERTO DE JESÚS GIL GARCES, demandante que ostenta la calidad de pensionado por invalidez de conformidad con la Resolución SUB107817 del 15 de mayo de 2020 (fols. 15 a 19 archivo No 02). Tampoco se encuentra en discusión que Colpensiones inicialmente reconoció la prestación económica a partir del 1° de junio de 2020 y que la fecha de la estructuración de la invalidez lo fue el 08 de mayo de 2019, de lo cual dan cuenta el citado acto administrativo y el dictamen N° 085004-2019 del 15 de noviembre de 2019 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (Fols. 26 a 32 archivo No 02). De igual manera, es

indiscutible que mediante Resolución SUB83722 del 05 de abril de 2021, Colpensiones reconoció el retroactivo pensional desde el 08 de mayo de 2019 hasta el 30 de mayo de 2020, por valor de \$10.558.432, pagado el 30 de abril de 2021 (Fols. 1179 a 1184 archivo No 08).

Así las cosas, cumple resaltar por la Sala que el inciso final del artículo 40 de la ley 100 de 1993 preceptúa que desde la fecha de estructuración procede el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez: *“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado”*. Por su parte, el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, prevé: *“(…) En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”*.

Del mismo modo, el artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable por disposición del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, establece que: *“Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”*

De la simple lectura de las normas citadas refulge la incompatibilidad de la pensión de invalidez con el subsidio o auxilio por incapacidad temporal, puesto que esta prestación económica del Sistema General de Pensiones está consagrada en el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, desarrollada por el artículo 28 del Decreto 806 de 1998, y tiene la finalidad de suplir los ingresos salariales que no puede percibir el afiliado cotizante en razón de la afectación de su estado de salud para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual.

Empero, también es cierto que la finalidad de los artículos 3 del Decreto 917 de 1999 y 10 del Acuerdo 049 de 1990 es que un mismo afiliado no perciba simultáneamente dos prestaciones económicas del sistema de seguridad social integral, por la obvia razón de que ello constituiría un pago doble por el mismo riesgo, esto es, la afectación a la salud, lo que iría en desmedro de mandatos constitucionales como la estabilidad financiera del sistema.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T 140 de 2016, ha delineado cómo proceder cuando se han reconocido incapacidades con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, a saber:

*“Con todo, se debe tener en cuenta que si la pensión de invalidez es reconocida, **esta será pagada desde la fecha de estructuración de la enfermedad de origen común**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, (...) por lo que los pagos por incapacidades posteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad **podrán ser descontados del retroactivo generado en favor del trabajador en caso de reconocerse la pensión de invalidez puesto que una y otra prestación (incapacidad y pensión) son incompatibles** toda vez que ambas reconocen la imposibilidad de la persona de prestar sus*

servicios, la primera temporalmente y la segunda de forma definitiva, pero ambas derivadas de una misma contingencia que es la afectación en la salud del individuo.

Ante este panorama normativo, se tiene que la pensión de invalidez sería incompatible con el pago de incapacidades por enfermedad temporal, habiendo lugar a solo una de estas prestaciones por la afectación del estado de salud del actor, lo que significa que no habría lugar al pago de incapacidades en los periodos que llegaren a ser cubiertos por la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración de la enfermedad de origen común ya que de lo contrario se estaría obligando a la parte accionada a hacer dos pagos por un mismo hecho, esto es, la pérdida de la capacidad laboral del afiliado". (Negrilla fuera del texto)

De otra parte, la Sala de Casación Laboral en sentencia SL1562-2019, también ha determinado la incompatibilidad entre las dos prestaciones económicas, de la cual se trasunta el parte respectivo:

"De modo que, como bien lo dedujo el Tribunal, de cara a la incompatibilidad establecida en el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, cuando, como en el presente asunto, el retroactivo pensional cubija periodos que también han sido cubiertos por subsidios por incapacidades temporales, la prohibición de que trata el citado decreto, a lo sumo, conduciría a la imposibilidad de que se disfruten o perciban, a la vez, la mesada pensional y el subsidio por la incapacidad, pero no a la imposibilidad del reconocimiento del derecho pensional."

De suerte que, como el artículo 40 de la ley 100 de 1993 dispone el pago de la pensión de invalidez a partir de la fecha de estructuración de la **PCL sin condiciones adicionales**, el correcto entendimiento de la incompatibilidad contenida en los artículos 3 del Decreto 917 de 1999 y 10 del Acuerdo 049 de 1990 impone colegir que debe procederse a reconocer la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración, con el correspondiente descuento de lo reconocido por incapacidades, dada su incompatibilidad.

Descendiendo al caso *sub iudice*, se tiene que el actor una vez obtenido el dictamen de pérdida de capacidad laboral, procedió el 12 de mayo de 2020 a solicitar la pensión de invalidez ante Colpensiones, entidad que reconoció la prestación a través de Resolución SUB107817 del 15 de mayo de 2020 con efectividad a partir del 01 de junio de 2020 y no desde la fecha de estructuración que lo fue el 08 de mayo de 2019, ello con sustento en que *"si bien el interesado allegó certificado de incapacidades expedido por Sura EPS, dicha certificación no cuenta con firma del funcionario para emitir dicha documentación"*.

A folio 34 del archivo No 02, obra el documento del 11 de marzo de 2020, con el cual la parte actora hizo la solicitud de la pensión de invalidez ante Colpensiones, y en la que se manifiesta que no registra incapacidades, el cual, si bien no tiene la firma de quien haya elaborado el documento, sí está membreteado por la EPS SURA y se hace anotación de que fue expedida

por la sección de prestaciones económicas de tal entidad y se relaciona al “transcriptor” de nombre Yesenia Andrea Villa Zapata. Adicionalmente, ante la negativa de Colpensiones en reconocer el retroactivo desde la fecha de estructuración, el demandante reiteró la solicitud del certificado de incapacidades ante la EPS SURA, obteniendo respuesta el 13 de junio de 2020 (Fols. 35 archivo No 02), en los siguientes términos: *“Es importante subrayar que de conformidad con el artículo 25° del Decreto 19 de 2012, este tipo de documentos privados para trámites administrativos no requieren firma, ni sellos, ni requieren ningún tipo de autenticación, pues estos se presumen auténticos, mientras no se compruebe tacha de falsedad”*, es decir, que contrario a lo sostenido por la a quo, el documento que aportó el demandante para demostrar que no tenía incapacidades por parte de la EPS SURA, no requería de firma para proceder a reconocer el disfrute pensional desde la fecha de estructuración, además de que no puede avalarse la argumentación de la a quo de que al ser la EPS una entidad privada, no puede COLPENSIONES hacer las respectivas validaciones, y que, le correspondía al demandante la carga demostrativa de allegar a COLPENSIONES el certificado de incapacidades debidamente firmado, pues tal requerimiento es desproporcionado, pues es la misma entidad la que con fundamento en el Decreto 19 de 2012 menciona que los documentos expedidos por tal entidad no requieren firma, allende que, tanto COLPENSIONES como la EPS SURA al ser entidades que hacen parte del sistema general de seguridad social integral, deben en conjunto hacer los respectivos controles y verificaciones con la finalidad de evitar un doble pago, y por lo tanto, le competía a COLPENSIONES dentro del término que tiene para resolver sobre la prestación económica solicitada hacer los requerimientos a que haya lugar a efectos de constatar que la información suministrada por el demandante, en este caso, la certificación de incapacidades, corresponde o no a la realidad, más no, optar por negar la prestación y desconocer el artículo 40 de la ley 100 de 1993 que estatuye que el pago de la pensión de invalidez es a partir de la fecha de estructuración de la **PCL sin condiciones adicionales**.

Así las cosas, fue equivocada la determinación de COLPENSIONES al haber negado inicialmente el disfrute de la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración de la invalidez, al paso que, cuando procedió a otorgar el retroactivo mediante la Resolución SUB83722 del 05 de abril de 2021, lo hizo teniendo en cuenta el certificado del 03 de febrero de 2021 (Fol. 137 archivo No 08), mismo que tampoco cuenta con la firma, es decir, se constata que COLPENSIONES impuso una carga adicional al demandante, y desconoció la fecha de disfrute en tratándose del reconocimiento de la pensión de invalidez, el cual, se itera, debió serlo desde la fecha de estructuración, razón por la que, de consiguiente, es procedente estudiar los intereses de mora.

2.5 Intereses moratorios. La Ley 100 de 1993, en el artículo 141, consagró los intereses moratorios como una respuesta al incumplimiento de las entidades de seguridad social que,

estando obligadas al pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, lo dilaten o retarden.

Frente a su causación, ha establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 16 de octubre de 2012 (rad. 42.826), que *“se causan a partir del plazo máximos de 4 meses a que se refiere el artículo 9° de la ley 797 de 2003, esto es, desde el momento en que, vencido el termino de gracia que tienen los fondos de pensiones para resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen”*.

En esa dirección, vale traer a colación la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, con radicación No 41754 del 20 de junio de 2012, en donde precisamente dio respuesta al problema jurídico *¿a partir de cuándo correrán los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?*, cuya respuesta fue: *“En cuanto al primer interrogante, y como tantas veces lo ha puntualizado esta Sala, la cuestión acá debatida hace mención al hecho de que por haberse causado la prestación al colmarse los requisitos que la ley prevé para su reconocimiento, la entidad se retardó no obstante haberse elevado la solicitud, lo cual le genera como sanción el pago de intereses a partir del momento de la satisfacción de tales requisitos, previo el descuento del tiempo que la ley concede al organismo de la seguridad social para que se surtan los trámites internos de la solicitud”*.

En consideración a lo expuesto, y en lo atinente a sí, los intereses se causan después de los 6 meses de que trata el artículo 4 de la Ley 700 de 2001, o después de los 4 meses que consagra el artículo 9 de la ley 797 de 2003, baste traer como precedente lo dispuesto por la Corte Suprema, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL13670-2016, radicación No 51829 del 7 de septiembre de 2016, en donde analizó la fecha a partir de cuándo se causan los intereses moratorios, y estableció que de conformidad con *“El artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con la modificación que le introdujo el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, dispuso que los fondos deben reconocer la pensión en tiempo no superior a cuatro meses después de radicada la solicitud por el petitionerario. En otras palabras, el término máximo de que disponen esos fondos para reconocer la pensión de vejez es de cuatro meses después de presentada la solicitud. Vencido dicho término, entran en mora y deben pagar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”*.

Descendiendo al caso sometido a estudio, tal derecho efectivamente se debe reconocer dentro del término señalado en el artículo 9° de la ley 797 de 2003, cuatro meses como periodo de gracia, contados a partir de radicada la solicitud, disposición legal que debe aplicarse por ser norma especial y posterior, frente a la cual serán insubsistentes los preceptos normativos anteriores y que le sean incompatibles, en términos de los artículos 1 a 3 de la Ley 153 de 1887, aún vigente; en el sub iudice, se presentó la solicitud el 12 de mayo de 2020 (Fol. 9 archivo No 02), por lo que la entidad tenía hasta el 12 de septiembre de 2020 para reconocer

y pagar la pensión de invalidez en debida forma, pero como ello no se verificó, hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios sobre las mesadas que van desde el 08 de mayo de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020, desde el 13 de septiembre de 2020 y hasta el 30 de abril de 2021, fecha en la cual le fue pagado el retroactivo pensional, conforme lo establece la Resolución SUB83722 del 05 de abril de 2021 (Fols. 51 a 56 archivo No 08).

Una vez realizado los cálculos de rigor se obtiene por intereses moratorios la suma de **\$3.605.154**, como se detalla en la siguiente liquidación:

Fecha del cálculo	30-abr-21					
Período	20214					
Interés Bancario Corriente	17,31%					
Tasa E.A. Moratoria	25,97					
Tasa Nominal Anual	23,31%					
Tasa Nominal Diaria	0,0638544%					

Período		Fecha de mora	Diferencia en días	Valor cuota	Tasa diaria	Valor presente
Desde	Hasta					
8-may-19	31-may-19	13-sep-20	229	\$ 634.889	0,06385%	\$ 92.838
1-jun-19	30-jun-19	1-jul-19	669	\$ 828.116	0,06385%	\$ 353.759
1-jul-19	31-jul-19	1-ago-19	638	\$ 828.116	0,06385%	\$ 337.367
1-ago-19	31-ago-19	1-sep-19	607	\$ 828.116	0,06385%	\$ 320.974
1-sep-19	30-sep-19	1-oct-19	577	\$ 828.116	0,06385%	\$ 305.111
1-oct-19	31-oct-19	1-nov-19	546	\$ 828.116	0,06385%	\$ 288.718
1-nov-19	30-nov-19	1-dic-19	516	\$ 1.656.232	0,06385%	\$ 545.709
1-dic-19	31-dic-19	1-ene-20	485	\$ 828.116	0,06385%	\$ 256.462
1-ene-20	31-ene-20	1-feb-20	454	\$ 877.803	0,06385%	\$ 254.474
1-feb-20	29-feb-20	1-mar-20	425	\$ 877.803	0,06385%	\$ 238.219
1-mar-20	31-mar-20	1-abr-20	394	\$ 877.803	0,06385%	\$ 220.843
1-abr-20	30-abr-20	1-may-20	364	\$ 877.803	0,06385%	\$ 204.028
1-may-20	31-may-20	1-jun-20	333	\$ 877.803	0,06385%	\$ 186.652
				\$ 11.648.832	TOTAL	\$ 3.605.154

2.6 Prescripción. En lo que respecta a los intereses moratorios, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (SI16585-2015) ha determinado que la fecha de exigibilidad de los mismos, es desde el momento en que se supera el plazo que tiene la entidad de seguridad social para reconocer y pagar la pensión solicitada, así:

“En efecto, la Sala ha enfatizado que la fecha en que se hacen exigibles los citados intereses no es otra que la del retardo o retraso en el pago de ese beneficio pensional, por lo que se debe precisar que sólo es dable hablar de retardo cuando los beneficiarios que se consideran con derecho a una pensión de sobrevivientes han elevado la respectiva solicitud de reconocimiento, que es cuando la entidad de seguridad social ha debido iniciar el trámite para su reconocimiento y su pago y, además de ello, siempre y cuando se haya incumplido con el término establecido en la ley para el reconocimiento de la prestación; mas no desde la fecha de la causación del derecho, porque su otorgamiento no es de oficio sino a petición de parte y porque si la ley ha conferido un plazo para el efecto, no puede considerarse que incurre en un retardo la entidad que cumple su obligación dentro de tal interregno.

Conforme lo expuesto, en el sub examine, la solicitud de la pensión de invalidez se presentó el 12 de mayo de 2020, por lo que, la exigibilidad de los intereses moratorios comienza desde el 13 de septiembre de 2020 (4 meses), fecha en la que si bien, le fue reconocida la prestación a través de la Resolución SUB107817 del 15 de mayo de 2020 (Fol. 14 a 19 archivo No 02), lo hizo desde el 01 de junio de 2020 y no desde la estructuración de la invalidez (08 de mayo de 2019), por lo que, al haber sido notificado tal acto administrativo el 15 de mayo de 2020 (Fol. 11 a 13 archivo No 02), a partir de allí se hace exigible la obligación de los intereses moratorios, ante la ausencia de pago de los mismos, razón por la que, tenía hasta el 15 de mayo de 2023 para interrumpir la prescripción o acudir a la vía judicial, y así lo hizo, dado que la reclamación data del 17 de diciembre de 2020 (Fol. 45 archivo No 08), y la demanda se presentó el 13 de enero de 2021 (Fol. 1 archivo No 01), es decir, dentro del término trienal, por lo que, no hay lugar a la prosperidad de tal excepción.

2.7 Indexación. Se impartirá condena por indexación teniendo en cuenta el criterio fijado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL359-2021, con la que recogió la tesis según la cual la corrección monetaria únicamente procedía a petición de parte, para en su lugar, sostener que *“el juez tiene la facultad de imponer la indexación de las condenas de manera oficiosa”*, en lo que al punto concluye:

“la imposición oficiosa de la actualización no viola la congruencia que debe existir entre las pretensiones de la demanda y la sentencia judicial. Por el contrario, pretende, con fundamento en los principios de equidad e integralidad del pago, ajustar las condenas a su valor real y, de esta manera, impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario. Es decir, procura que la obligación se satisfaga de manera completa e integral”.

Por tanto, como en el sub examine el monto de la condena infligida se ve menguado por el hecho notorio de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, deberá Colpensiones cancelar las sumas de dinero ordenadas por concepto de intereses moratorios de \$3.605.154 debidamente indexadas, corrección monetaria que opera a partir del 01 de mayo de 2021 y hasta la fecha en que se cancele la obligación, utilizando la fórmula establecida para el efecto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como lo enseña de manera iterativa en sus fallos. Sin que se presente la incompatibilidad entre los intereses moratorios e indexación, ya que la indexación opera no sobre las mesadas que componen el retroactivo, ni tampoco sobre el interregno en la que se calculó los intereses, sino sobre el valor definido por intereses moratorios, el cual, al ser una condena en concreto y determinada con corte al 30 de abril de 2021, está sufriendo los efectos de la devaluación de la moneda desde el 01 de mayo de 2021 hasta la fecha en que se efectuó el pago, tal y como en casos de similares contornos ha dispuesto nuestra Corte Suprema de Justicia, entre otras, en la sentencia SL4942/20.

Bajo ese horizonte, para la Sala se impone la revocatoria de la sentencia de primer grado en lo relacionado con los intereses moratorios, impartándose condena sobre ese concepto, junto con la indexación, conforme lo atrás vertido.

3. Costas. En segunda instancia se impondrá condena en costas a cargo de COLPENSIONES y a favor de la parte demandante, por haber prosperado el recurso de alzada, fijándose como agencias en derecho la suma de \$1.160.000. Las de primera instancia se revocan, y correrán a cargo de Colpensiones, dado que de conformidad con lo establecido en el artículo 365, numeral 1° del CGP, la entidad demandada resultó vencida en el proceso. Tásense.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.: REVOCAR la sentencia materia de apelación, proferida el 02 de marzo de 2023 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante la cual absolvió a COLPENSIONES de las súplicas de la demanda, para en su lugar, **CONDENAR a COLPENSIONES** a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, a partir del 13 de septiembre de 2020 y hasta el 30 de abril de 2021, sobre las mesadas causadas a partir del el 08 de mayo de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020, el cual corresponde a la suma de **\$3.605.154**, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR la INDEXACIÓN del valor generado por intereses moratorios, esto es, sobre el valor de **\$3.605.154**, corrección monetaria que opera a partir del 01 de mayo de 2021 y hasta la fecha en que se cancele la obligación, utilizando la fórmula establecida para el efecto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.


TERCERO: COSTAS en esta instancia cargo de COLPENSIONES y a favor de la parte demandante, fijándose como agencias en derecho la suma de \$1.160.000. Las de primera se revocan y correrán a cargo de COLPENSIONES. Tásense.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL 2550 de fecha 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario